

A nivel general, el Poder Judicial del Estado de Coahuila tiene información sobre las siete líneas estratégicas y han llevado a cabo esfuerzos por mejorar la accesibilidad de sus servicios a la ciudadanía en general por ejemplo, mediante los servicios de defensoría móvil y los programas de radio para difusión de cultura jurídica y resoluciones; además de la implementación de mecanismos de participación ciudadana y la generación de datos abiertos, como parte de sus Políticas de Transparencia y Justicia Abierta. Sin embargo, aún es necesario reforzar la interseccionalidad de las políticas para mejorar el acceso a la justicia a poblaciones LGBT, indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, etc.

A continuación se desglosan los resultados por **cada una** de las líneas estratégicas.



1. Generación de información estadística útil y accesible

Tiene un registro de los casos ingresados, las sentencias dictadas, las órdenes de protección otorgadas, así como de su personal y capacitaciones. Además, la información que genera es pública.

Aún es necesario fortalecer el registro de información estadística desagregada por sexo, edad, etnia, discapacidad, identidad y preferencia sexual que abone a identificar brechas en el acceso a la justicia a poblaciones históricamente discriminadas.

Índice de avance



Promedio nacional (L1)



2. Participación ciudadana

Cuenta con mecanismos de colaboración tales como el *Observatorio Judicial del Estado de Coahuila* y sus mesas de trabajo las cuales, involucran a la ciudadanía, organizaciones, movimientos

y colectivas que trabajan por mejorar el acceso a la justicia a poblaciones históricamente discriminadas.

Índice de avance



Promedio nacional (L2)



3. Capacitación judicial

El Poder Judicial llevó a cabo actividades de capacitación para su personal en materia de PEG y transparencia. Una de estas capacitaciones contó con evaluación.

Índice de avance



Promedio nacional (L3)



4. Fortalecimiento institucional: Unidades de transparencia

El Poder Judicial cuenta con una Unidad de Transparencia, con una normatividad específica y presupuesto general; sin embargo, aún no tienen un diagnóstico que dé cuenta de las necesidades de su Unidad para cumplir con sus obligaciones de transparencia.

Índice de avance



Promedio nacional (L4)



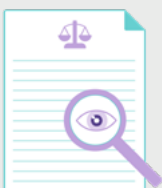
5. Política de transparencia proactiva

El Poder Judicial no cuenta con una política de transparencia proactiva ni con criterios para publicar información en materia de género y derechos humanos. Sin embargo, reporta acciones como la divulgación proactiva de información estadística en formato de datos abiertos y la divulgación de sentencias mediante programas de radio.

Índice de avance



Promedio nacional (L5)



6. Publicación de sentencias

El Poder Judicial tiene lineamientos propios para la generación de versiones públicas de sentencias, también tiene un registro de las sentencias que publicó en el año 2021. Asimismo, cuenta con un buscador de sentencias, pero es necesario integrar filtros para localizar sentencias relevantes por materia o población que atienden.

Índice de avance



Promedio nacional (L6)



7. Prácticas innovadoras

El Poder Judicial ha implementado estrategias para mejorar el acceso a la justicia, tanto en materia digital (citas, notificaciones y juicios en línea) como alternativas (servicio de defensoría móvil y telefónica).

Índice de avance



Promedio nacional (L7)



GLOSARIO

1. Generación de información estadística útil y accesible: Analiza si el Poder Judicial tiene información estadística (datos) de calidad, útil y accesible, sobre los servicios que brindan (registro de los casos ingresados, sentencias dictadas, órdenes de protección otorgadas) y sus estructuras (el personal que trabaja ahí y la capacitación que se les brinda), de manera que permita identificar y diseñar políticas para erradicar las barreras para el acceso a la justicia para mujeres, personas indígenas, con discapacidad, LGBTI+, infancias, entre otras poblaciones históricamente discriminadas.

2. Participación Ciudadana: Analiza si el Poder Judicial tiene mecanismos de participación ciudadana, y si además estos mecanismos le permiten vincularse con la ciudadanía (colectivas, movimientos y organizaciones que acompañan a poblaciones históricamente discriminadas) para co-construir mejores soluciones a las políticas y la forma de impartir justicia.

3. Capacitación Judicial: Analiza si el Poder Judicial imparte capacitaciones de calidad al personal, en materia de género y derechos humanos, así como sobre sus obligaciones de transparencia, que cumplan con criterios mínimos de idoneidad (tipo de actividades, duración, perfil de las docentes, criterios de evaluación), de manera que se garantice el derecho a la justicia de todas las personas.

4. Fortalecimiento institucional: Unidades de transparencia: Analiza si el Poder Judicial cuenta con una Unidad de Transparencia fortalecida, con un marco normativo que sustente su creación y funcionamiento, los recursos suficientes y un diagnóstico de sus necesidades para que puedan cumplir con sus obligaciones, pues estas son el vínculo principal entre el Poder Judicial y la diversidad social.

5. Política de transparencia proactiva: Analiza si el Poder Judicial ha establecido Políticas de Transparencia Proactiva para que la información que publica sea útil, comprensible y difundida por los medios adecuados, de manera que cada día haya un mayor conocimiento sobre nuestros derechos y cómo hacerlos exigibles.

6. Publicación de sentencias: Analiza si el Poder Judicial cumple con la obligación de publicar sentencias accesibles, comprensibles y actualizadas, que permitan a la ciudadanía comprender las decisiones de los jueces, conocer nuestros derechos. pero también monitorear y evaluar la calidad de la justicia que se imparte, en especial cuando se trata de poblaciones históricamente discriminadas.

7. Prácticas innovadoras: Analiza si el Poder Judicial ha implementado prácticas innovadoras (programas, servicios, actividades, protocolos) para mejorar el acceso a la justicia, tanto por medios virtuales como a través de servicios itinerantes, que acerquen la justicia a las poblaciones históricamente discriminadas y alejadas de la justicia.